

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310501820150078700
Proceso:	Ordinario
Demandante:	SANDRA LUCIA MUÑOZ GUZMÁN
Demandado:	COLFONDOS S.A.
Llamada en garantía:	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
M. P.	MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM
Fecha de fallo:	05/05/2023
Decisión:	CONFIRMA Y ADICIONA.

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 08/05/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cinco (05) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	SANDRA LUCIA MUÑOZ GUZMÁN
DEMANDADO	COLFONDOS S.A.
LLAMADA EN GARANTÍA	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
ORIGEN	Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	05001 31 05 018 2015 00787 01
TEMAS	Pensión de sobrevivientes
CONOCIMIENTO	Apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha y hora señaladas, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por las Magistradas ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, LILIANA MARÍA DUQUE CASTAÑEDA y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por SANDRA LUCIA MUÑOZ GUZMÁN contra COLFONDOS S.A. y a la que fue llamada en garantía la aseguradora MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda¹

La señora Sandra Lucía Muñoz Guzmán formula demanda contra Colfondos S.A. pretendiendo el reconocimiento y pago i) de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de Víctor Manuel Bolívar Muñoz, su hijo, de manera retroactiva desde el 14 de septiembre de 2012; ii) intereses moratorios estipulados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y iii) costas procesales a cargo de la demandada.

Fundamentó sus pretensiones en que la demandante y José Leonardo Bolívar Ortiz procrearon a Víctor Manuel Bolívar Muñoz, quien falleció el 14 de septiembre de 2012, momento para el cual se encontraba afiliado a Colfondos S.A. y contaba con más de 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a su fallecimiento. Su estado civil era soltero, no tuvo compañera permanente ni hijos y convivió con su madre de forma continua hasta su muerte.

¹ 01PrimeraInstancia; 01Expediente1820150787.PDF, págs.3/4

El 6 de diciembre de 2012, ambos padres solicitaron conjuntamente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ante Colfondos S.A., la cual fue negada el 5 de abril de 2013, bajo el argumento que ambos contaban con ingresos propios por lo cual no existía dependencia económica de ninguno de los dos respecto de su hijo afiliado; pese a ello, afirma que siempre se ha dedicado a las labores del hogar, no es pensionada, no tiene rentas ni bienes y tanto ella, como el señor José Leonardo dependían económicamente de su hijo al momento de su deceso, precisando que el padre de su hijo además, abandonó el hogar lo que le ha conllevado aún más apremios económicos.

Oposición a las pretensiones de la demanda

i) Colfondos S.A.²

Acepta la fecha en que falleció el afiliado, así como su vinculación a la AFP y la densidad de semanas cotizadas al momento de su muerte, sin embargo, se opone a la prosperidad de las pretensiones incoadas por la demandante, argumentando que esta no acreditó el requisito de dependencia económica respecto de su hijo fallecido, porque conforme a la investigación administrativa realizada por Mapfre S.A. –entidad encargada de la póliza de seguro previsional-, el señor José Leonardo tenía sus propios ingresos producto de su actividad laboral, que le permitía solventar los gastos necesarios para la subsistencia de la demandante en ejercicio de su deber conyugal; añade que con los ingresos y gastos del causante, de \$566.000 y sus gastos mensuales de \$360.000, su aporte máximo mensual ascendía a \$206.000 que no fue realmente significativo. Excepcionó: que la subsistencia económica de la demandante, no dependía del afiliado fallecido; inexistencia de la obligación; cobro de lo no debido; buena fe; compensación y la que llamó “genérica”.

Llamó en garantía a Mapfre Colombia Seguros de Vida S.A., con quien contrató póliza colectiva de seguro previsional de invalidez y sobrevivientes³, el cual fue admitido mediante auto del 22 de agosto de 2016⁴.

Mapfre S.A.⁵ –Llamada en garantía-

Se opuso a las pretensiones de la demanda principal por no acreditar el requisito de dependencia económica para ser beneficiaria de tal prestación. Excepcionó: inexistencia de la obligación; improcedencia de sanciones moratorias; improcedencia de: la acumulación de indexación e intereses moratorios, de costas, y la que llamó “prescripción”.

Al llamamiento se opuso indicando que su obligación se circunscribe al pago de la suma adicional necesaria para el financiamiento de la prestación, y para establecerla, se deben tener en cuenta los aportes que posee el afiliado en la cuenta de ahorro individual, sus rendimientos y el bono pensional cuando haya lugar, y en tal sentido, tampoco le asiste obligación de reconocer intereses moratorios, porque la póliza ampara específicamente

² 01PrimeraInstancia; 01Expediente1820150787.PDF, págs.84/94

³ 01PrimeraInstancia; 01Expediente1820150787.PDF, págs.108/123

⁴ 01PrimeraInstancia; 01Expediente1820150787.PDF, págs. 186/187

⁵ 01PrimeraInstancia; 01Expediente1820150787.PDF, págs. 213/223

la suma adicional requerido para completar el capital para el pago de la prestación. Excepcionó: ausencia de cobertura de la póliza, límite de la obligación del asegurador, improcedencia de intereses moratorios a cargo del asegurador e improcedencia de pretensión de condena en costas en contra de Mapfre Colombia Vida S.A.

El señor José Leonardo Bolívar Ortiz, padre del causante, fue llamado al proceso en calidad de interviniente Ad Excludendum⁶. En audiencia del 24 de agosto de 2017 manifestó interés de presentar demanda, por lo cual se suspendió la diligencia otorgándole término para constituir apoderado y presentar demanda⁷, no obstante, se abstuvo de ello, por lo cual continuó con el proceso.

Sentencia de primera instancia⁸

El 11 de mayo de 2018, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia declarando que asiste a la demandante, derecho a la pensión de sobrevivientes en razón al fallecimiento de su hijo Víctor Manuel Bolívar Muñoz. Condenó a Colfondos S.A. a pagar la suma de \$48.314.184 por concepto de retroactivo pensional liquidado desde el 14 de septiembre de 2012 hasta el 30 de abril de 2018, suma sobre la cual autorizó el descuento por conceptos de salud. Dispuso que se continúe pagando a partir del 1° de mayo de 2018 como mesada pensional un SMLMV, sin perjuicio de los aumentos de ley y la mesada adicional de cada año. Condenó al pago de intereses moratorios sobre el retroactivo pensional, a partir del 7 de febrero de 2013 y hasta el momento del pago del retroactivo pensional. Declaró probada la excepción de compensación propuesta por Colfondos S.A. y ordenó a Mapfre S.A. a cubrir la suma adicional necesaria para financiar la pensión de sobrevivientes siempre y cuando el capital de la cuenta individual del asegurado incluyendo aportes, rendimientos financieros y bonos pensionales, resulten insuficientes para financiar la prestación aludida en los términos de la póliza contratada entre dichas sociedades, vigente para la fecha del fallecimiento del causante. Por último, condenó en costas a Colfondos S.A., fijando como agencias en derecho el equivalente a 7 SMLMV.

Para fundamentar lo decidido, la Juez A Quo tras realizar una valoración de la documental allegada al proceso, así como los testimonios e interrogatorios rendidos, concluyó en que la demandante al momento del fallecimiento de su hijo Víctor Manuel, no tenía la capacidad de solventar sus propios gastos, y que la sumatoria de los aportes de su hijo y su entonces cónyuge, José Leonardo, cubría la subsistencia de la demandante. Dio credibilidad a los testimonios de Eunice de Jesús Agudelo Vega y Álvaro López Agudelo, quienes dieron cuenta que el fallecido Víctor aportaba para los gastos del hogar, y fueron cuantificados en la investigación administrativa por los propios padres, en \$1'400.000, encontrando que lo devengado por el señor José Leonardo no superaba los \$900.000, resultando necesario el aporte del causante cuantificado en \$566.000 recibidos mensualmente para cubrir esa diferencia, de forma que al fallecer éste y faltar su aporte tuvieron que reacomodar sus condiciones de vida, máxime por cuanto la demandante

⁶ 01PrimeralInstancia; 01Expediente1820150787.PDF, pág. 63

⁷ 01PrimeralInstancia; 01Expediente1820150787.PDF, pág. 320

⁸ 01PrimeralInstancia; 01Expediente1820150787.PDF, págs.334/335

madre no laboraba, no era pensionada ni recibía rentas, ello, pese a algunas inconsistencias encontradas en sus testimonios, las que consideró carecen de identidad suficiente para desvirtuar la dependencia económica que existió de la madre respecto de su hijo, tanto así, que al fallecer dicho hijo, se presentaron serias dificultades económicas que terminaron por disolver el hogar de sus padres.

Respecto del llamamiento en garantía indicó que de la póliza de seguro previsional allegada al plenario, cuya vigencia fue aceptada por la aseguradora al contestar el llamamiento, y regía para el momento del fallecimiento de afiliado, se desprende la obligación del asegurador respecto de la suma adicional para completar el capital necesario para financiar el monto de la prestación, por lo cual autorizó a Colfondos S.A. a recurrir ante la aseguradora por aquellas sumas adicionales siempre y cuando el capital de la cuenta individual de dicho asegurado, incluidos los aportes, rendimientos financieros y bonos pensionales, o todo el dinero que resulte de su cuenta de ahorro individual sea insuficiente para financiar la prestación.

Recurso de apelación

i) Colfondos S.A.⁹: inconforme con lo decidido, solicitó revocar en su integridad la sentencia y en su lugar absolver la entidad de todas las pretensiones, bajo los siguientes argumentos:

- a) La demandante en su interrogatorio de parte, expresó que convivía con su esposo y con su hijo, quien trabajó los últimos 7 meses de vida antes de fallecer, devengaba alrededor de 1 SMLVM, tenía gastos personales de \$360.000 destinados a gastos del celular, salidas con su novia y el crédito de la moto, no tenía beneficiarios en salud, gastos que informó al ser entrevistada por Colfondos S.A. en el año 2012; su esposo para ese momento era conductor y ganaba \$950.000 mensuales, siempre cumplió con sus deberes conyugales siendo el sustento económico del hogar, toda vez que la actora nunca ha trabajado, estaba afiliada como su beneficiaria a la EPS y recibió ayudas de él aun después de su separación, y finalmente que recibió por devolución de saldos \$1'030.000, lo anterior aunado a los dichos del señor José, quien corroboró ser cónyuge de la demandante y tener la como beneficiaria en salud; dicho señor expresó que él asumía todos los gastos de la casa cuando su hijo Víctor Manuel no trabajaba, todas las deudas estaban a nombre del señor José, interpreta que los aportes de su hijo eran para el hogar, más no para la señora Sandra Lucía, y pese a que el causante tuvo otros trabajos y también recibía bonificaciones cuando era conductor, ello no quedó registrado en la investigación administrativa.

Resalta que las afirmaciones rendidas por ambos padres deben tenerse como confesión y no solo como afirmaciones en su favor, por estimar demostrada la inexistencia de la dependencia económica de la actora, advirtiendo que, de haber existido, no habría tardado 3 años en interponer la acción judicial.

⁹ 01PrimeraInstancia; 07Sentencia1820150778.mp3

- b) Sostiene que los testigos no tienen conocimiento de los hechos debatidos en el subjuicio, y al ser de oídas, carecen de utilidad para el debate probatorio, refiriendo especialmente a la declaración de la señora Eunice de Jesús, quien pese a indicar que conoce a la señora Sandra hace más de 32 años, no vive cerca de donde vivió la demandante con su hijo, conoció la casa porque ahí recogía madera para transportar; señaló que a Víctor le pagaban con una tarjeta y Sandra se la manejaba, cuando ésta última indicó su hijo le daba el dinero a ella; desconoce cuáles eran los gastos del causante, del hogar y de la demandante, así como el valor del arriendo; afirmó que la demandante tenía afiliado a su hijo a una funeraria, pero cuando este murió, ella realizó un préstamo para el pago de gastos fúnebres; refirió que la casa era pequeña, tenía un cuarto, en la sala dormía Víctor y una cocina, lo cual no es cierto según lo manifestado por la demandante y la documental, y advirtió que José siempre pagó los gastos de la familia. El testigo Álvaro tampoco conoce datos concretos de las condiciones de la demandante, ni sobre los gastos del hogar, sus respuestas son suposiciones; indicó que cuando murió el causante llevaba 2 años conduciendo un camión, contrariando lo dicho por padres y lo registrado en la investigación administrativa, en torno a que éste solo llevaba 7 meses de trabajo. Dijo conocer por su condición de compañeros, que el causante devengaba \$560.000 y una bonificación, pese a ello, estos nunca trabajaron en la misma empresa, ni observó cuando Víctor recibía su salario o la bonificación, y si bien indicó que éste daba el dinero en efectivo a su mamá, ello difiere de lo manifestado por la deponente Eunice de Jesús.
- c) Añade que, si bien la H. CSJ advierte que la dependencia económica puede ser parcial, es necesario que dicha subordinación sea determinante, y permita concluir que sin el aporte realizado por el causante se afecta el mínimo vital del beneficiario, atendiendo a las reglas previstas en Sentencia 47676 del 2014; de ese modo, para el recurrente quedó demostrado en el proceso que los gastos del hogar ascendían a \$1'300.000, para los que el causante aportaba \$360.000, dinero que no se aprecia, ni se valora como determinante por parte del apelante para predicar la dependencia económica de la demandante.
- d) Se opone a la condena a los intereses moratorios, atendiendo a que la negativa a reconocer la prestación económica se sustentó en las normas ya establecidas, con las que se concluyó que no satisfizo el requisito de dependencia económica.
- e) Finalmente, depreca que, de confirmar la condena, se mantenga incólume lo decidido en torno a la compensación de la devolución de aportes realizada a los padres del causante por valor de \$1'082.882 pesos, entregada a cada uno de ellos en una suma igual de \$541.441 pesos respectivamente, al igual que la orden emitida contra Mapfre S.A. de cubrir la suma adicional necesaria para realizar el pago y lograr el financiamiento de la pensión de sobrevivientes ordenada.

ii) Mapfre S.A.¹⁰ Solicita se revoque lo decidido y se absuelva a la entidad de todas las pretensiones, doliéndose de valoración inadecuada de la prueba arribada al expediente,

¹⁰ 01PrimeralInstancia; 07Sentencia1820150778.mp3

en tanto al iniciar la sentencia advirtió acreditada la falta de capacidad económica de la demandante, situación fáctica no discutida en el proceso, sino la dependencia económica, que se probó, no de su hijo, sino de su esposo, vía confesión. No hubo valoración integral de la prueba testimonial, los declarantes basaron sus dichos en suposiciones, y de haber realizado un estudio juicioso se hubiera concluido en que los dichos de los deponentes Eunice y Álvaro contradicen lo manifestado por la actora.

Tampoco advirtió los aspectos objeto de confesión por parte de la demandante, en torno a que su cónyuge era quien velaba económicamente por ella, afirmación suficiente para desestimar las pretensiones, así como que el causante asumía sus gastos propios; si este ganaba \$560.000, de los que se restan \$360.000 de sus gastos personales, implica que \$200.000 se destinaban a los gastos del hogar que era conformado por 3, de donde se desprende la inexistencia de dependencia económica, resultando una mera conjetura que el aporte realizado por Víctor Manuel fuera para su madre, aspecto en que no coinciden los declarantes, pues no indicaron a cuánto ascendía el aporte de ese hijo, ni que esta ayuda le fuera suministrada por el causante. Llama la atención en que la madre del causante desconoce cuánto ganaba su hijo, pero los testigos si lo conozcan, llegando la A Quo a conclusiones contrarias a la realidad. Ello también fue advertido en la investigación administrativa, en el sentido de la dependencia económica era respecto de su esposo, quien siguió suministrándole ayudas después de la muerte de su hijo. Fue objeto de confesión también que su hijo necesitaba dinero para alimentación, transporte y vestuario, y de los \$200.000 que éste aportaba se compraban cosas para él, para Mapfre no puede predicarse dependencia económica de un aporte que no tiene tal entidad.

No se estudió la información contenida en la investigación en conjunto con las pruebas restante, que de hacerlo se hubiera podido concluir en las inconsistencias de los testigos.

Alegatos en segunda instancia

Concedido el término para alegar de conclusión en esta sede, ambas partes lo recorrieron oportunamente.

Colfondos S.A.¹¹, reiteró los argumentos expuestos en su alzada para sustentar las razones por las que se debe revocar la sentencia de instancia; al igual que **Mapfre S.A.**¹²

¹¹ 02SegundaInstancia; 04AlegatosColfondos1820150778.pdf

¹² 02SegundaInstancia; 05AlegatosMapfre1820150778.pdf Enfatizó que la juez A Quo incurrió en errores de apreciación probatoria y jurídica, pues no realizó un análisis crítico individual de la investigación administrativa adelantada por la aseguradora, las contradicciones presentadas entre los testigos Álvaro López Agudelo y Eunice Agudelo Vega, la confesión en que incurrieron los padres del afiliado fallecido. Dentro de sus motivos, recalcó que el causante solo llevaba trabajando 7 meses, de manera que los gastos del hogar antes de ello, estaban a cargo exclusivamente del señor José Leonardo Bolívar, así, más que una ayuda a sufragar las necesidades económicas de los padres, lo que Víctor hacía era aportar recursos para solventar sus propias necesidades, lo cual entendido, según las reglas de la experiencia, cuando los hijos son mayores de edad y trabajan, y viven con sus padres, comienzan a compartir los gastos del hogar, pues de lo contrario tendrían que asumir gastos mayores, pretendiendo hacer ver que la demandante dependía económicamente del actor, cuando en realidad era una contribución al pago de los gastos propios. Adicionalmente, en la investigación administrativa se señaló que, tras la muerte del hogar, los gastos se redujeron a la suma de \$764.000 lo que permite deducir que hubo una clara merma en los gastos fijos mensuales en atención a la ausencia del hijo, por lo que se concluyen no satisfechos los requisitos para acceder a lo pretendido.

Finalmente, la **demandante**¹³ solicita se confirme la decisión de instancia, indicando que la versión rendida por el padre del causante es genuina, espontánea y natural, no hay matices de adiestramiento o instrucción, del cual se concluye que el causante siempre vivió con sus padres y siempre aportó su salario con el fin de sufragar los gastos de su casa, estando probado que, la demandante no trabajó en vida de su hijo, y si bien el señor José Leonardo aportaba económicamente al hogar, el ingreso de Víctor Manuel era determinante para tener condiciones de vida aceptables, y tras su fallecimiento se alteraron a tal manera que se vieron obligados a cambiar su domicilio a una pieza, por falta de capacidad de pago del arrendamiento donde vivían; así, tales circunstancias económicas generaron conflictos en la pareja de forma tal, que causaron su separación, afectando especialmente la calidad de vida de la demandante, si se tiene en cuenta que es una mujer ama de casa, sin experiencia laboral, ni ingresos adicionales.

Añade que las omisiones en las declaraciones de los señores Álvaro Agudelo y Eunice de Jesús Agudelo, recae en detalles demasiado íntimos del hogar como son las finanzas y los montos exactos que se pagan por mercado, servicios y los gastos en salidas personales, y resultaría más sospechoso que tuvieran especial claridad sobre tales sumas, porque generaría dudas sobre su libre versión.

II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, es decir, en consonancia con los puntos que fueron objeto de apelación.

Vistos los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por el demandado, interpreta la Sala, que el problema jurídico a resolver se restringe a determinar: **a)** la procedencia o no del reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes en favor de la demandante con ocasión del fallecimiento de Víctor Manuel Bolívar Muñoz, en caso de concluir que sí, se analizará; **b)** la procedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

No se discute que el afiliado dejó causado el derecho a la prestación en favor de sobrevivientes, por cuanto, Colfondos S.A., al negar su reconocimiento y pago, arguye que lo hace porque la madre no dependía económicamente del causante para la fecha del fallecimiento, el cual es un requisito esencial para su reconocimiento, sin embargo, no aduce que la prestación no se haya causado. Adicionalmente, al contestar la demanda acepta la densidad de semanas cotizadas por el afiliado.

Hechos relevantes acreditados documentalmente

- Sandra Lucía Muñoz Guzmán nació el 11 de enero de 1976¹⁴.
- Victor Manuel Bolívar Muñoz nació el 18 de septiembre de 1992. Fue hijo de

¹³ 02SegundaInstancia; 06AlegatosDemandante1820150778.pdf

¹⁴ 01PrimeraInstancia; 01Expediente1820150787.PDF, pág.57

Sandra Lucía Muñoz Guzmán y José Leonardo Bolívar Ortiz¹⁵ y falleció el 14 de septiembre de 2012¹⁶.

- Victor Manuel Bolívar Muñoz se afilió en pensiones a Colfondos S.A. en calidad de trabajador dependiente el 3° de marzo de 2011¹⁷, teniendo acreditadas para el momento de su fallecimiento un total de 61,71 semanas cotizadas¹⁸.
- La señora Sandra Muñoz Guzmán y el señor José Leonardo Bolívar Ortiz en calidad de padres del fallecido el 6 de diciembre de 2012, suscribieron ante Mapfre Colombia cuestionario para padres dependientes reclamantes para pensión de sobrevivencia, en ocasión a la muerte de su hijo¹⁹. En ella se indicó que Víctor Manuel Bolívar Muñoz hasta el momento de fallecer vivía con sus padres, era soltero y no tuvo hijos, contribuía a los gastos de su hogar con la colaboración de su padre José Leonardo, trabajaba como conductor en la Central Maderera hace 7 meses devengando un salario de \$566.700 mensuales que recibía en 2 quincenas, el cual aportaba completamente al hogar. Sus gastos personales ascendían a \$360.000 mensuales y los gastos del hogar ascendían a \$1.385.000 pesos mensuales de los cuales su padre asumía \$819.000 pesos mensuales y el restante se cubría con el aporte de Victor. La Sandra Lucía carecía de ingreso laboral por no haber trabajado, tampoco recibía renta, es ama de casa y dependía del ingreso de su esposo y de su hijo²⁰.
- El 30 de enero de 2013 Mapfre S.A. negó a Colfondos S.A. la solicitud de indemnización de sumas adicionales para la pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento del causante, en virtud de lo hallado en entrevista al no existir dependencia económica de los padres respecto de su hijo²¹.
- Mediante comunicación del 5 de abril de 2013 Colfondos S.A., negó a los padres del causante el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, argumentando que de la investigación adelantada por Mapfre S.A. se concluye que no existe dependencia económica de los padres respecto de su hijo, pues cuentan con sus propios ingresos²².
- A través de soportes del 10 de septiembre de 2015, se evidencia que Colfondos S.A. efectuó la devolución de saldos en favor de Sandra Lucía Muñoz Guzmán y José Bolívar Ortiz, en partes iguales equivalentes a \$541.441 para un total de 1.082.882²³, dinero que fue retirado.
- Certificado expedido por EPS Comfenalco el 6 de diciembre de 2012, en el que se observa que la señora Sandra Lucía Muñoz Guzmán estuvo afiliada en calidad de

¹⁵ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820150787.PDF, págs.55/56

¹⁶ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820150787.PDF, pág.59

¹⁷ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820150787.PDF, pág.97

¹⁸ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820150787.PDF, pág.98

¹⁹ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820150787.PDF, pág.35

²⁰ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820150787.PDF, págs.38/54

²¹ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820150787.PDF, págs.99/101

²² 01PrimerInstancia; 01Expediente1820150787.PDF, págs.35/37 y 102/104

²³ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820150787.PDF, págs.105/107

beneficiaria de su esposo José Leonardo Bolívar Ortiz desde el 21 de enero de 2011²⁴.

- En respuesta a requerimiento realizado por el juzgado de instancia, Central Maderero S.A.S. el 5 de mayo de 2017 certificó que el señor José Leonardo Bolívar Ortiz no se encontraba vinculado con dicha empresa²⁵.

a) La demandante como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes

La calidad de beneficiaria invocada por la demandante está regulada en el artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003, modificadora de los artículos 46 y 74 de la Ley 100 de 1993²⁶, y exige la dependencia económica de los padres respecto del causante, para el momento del deceso.

En criterio de la H. Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, la prestación de sobrevivientes constituye *“una garantía frente al estado de desprotección económica de un grupo de personas que no pueden subsistir con recursos propios y cuyas condiciones de existencia se encuentran ligadas a lo que proveía su descendiente fallecido”*²⁷

Esa Corporación y la Corte Constitucional, han definido el alcance de la dependencia económica como el estado de necesidad que se predica de quien depende económicamente, frente a la persona que asume la obligación de su sustento, precisando que tal situación **no tiene que ser total y absoluta**²⁸, porque en el contexto de un Estado Social de Derecho **no puede exigirse la configuración de estados de indigencia**, pero, sí debe existir una relación de necesidad entre el aporte y la vida digna del beneficiario, de modo que en el contexto jurisdiccional, el análisis debe enfocarse en que sin la ayuda del benefactor, la persona frente a quien se predica la dependencia económica entraría en un estado de afectación considerable de sus derechos fundamentales, por consiguiente, al faltar la ayuda del afiliado, la economía del peticionario se vería menoscabada.

Según lo anterior, la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en su línea jurisprudencial, precisó las siguientes sub reglas aplicables, en el estudio de estos asuntos²⁹:

²⁴ 01PrimeraInstancia; 01Expediente1820150787.PDF, pág.241

²⁵ 01PrimeraInstancia; 01Expediente1820150787.PDF, págs. 309/313

²⁶ D) A falta de cónyuge, *compañero o compañera permanente* e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este;

²⁷ SI4599 de 2019

²⁸ En Sentencia C-111 de 2006, decidió “Declarar **EXEQUIBLES** los literales d) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, salvo la siguientes expresión: “*de forma total y absoluta*”, que se declara **INEXEQUIBLE**”

²⁹ La línea jurisprudencial se abandera por la sentencia hito, radicación N° 35.156 del 9 de junio de 2010 de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ratificada en las sentencias radicación N° 35.991 de 2011; N° 37.595 de 2011; N° 42.792 de 2011; SL 9640 de 2014; SL 8928 de 2014; SL 8406 de 2015 radicación N° 47.693 del 1 de julio de 2015, entre otras.

- La dependencia económica debe definirse en cada caso particular y concreto, según el análisis conjunto de la prueba legalmente decretada y practicada.
- Para concluir la dependencia, **es menester que se demuestre subordinación económica relevante, esencial y preponderante del beneficiario frente al causante para el momento del fallecimiento**, de modo que, al faltar el ingreso, se afecte el mínimo sostenimiento de la familia.

Ha expresado esa Alta Corporación que debe entenderse por dependencia económica *“«la subordinación de una persona respecto de otra, por necesitar de su ayuda o auxilio para llevar una vida digna», puntualizando que dicha condición desaparece «cuando la persona es autosuficiente, por estar en capacidad de procurarse por sus propios medios los recursos indispensables para su subsistencia en condiciones de dignidad»”*³⁰.

El concepto atiende a *“i) una falta de autosuficiencia económica, lograda a partir de otros recursos propios o de diferentes fuentes; ii) y una relación de subordinación económica, respecto de los recursos provenientes de la persona fallecida, de manera que, ante su supresión, el que sobrevive no puede valerse por sí mismo y ve afectado su mínimo vital en un grado significativo”*³¹. “la dependencia de los padres respecto de sus hijos no debe ser absoluta, pero en todo caso la relación de subordinación económica respecto de la persona fallecida debe ser de tal proporción que les impida valerse por sí mismos, aun cuando cuenten con recursos propios o provenientes de terceros”³².

Dicha postura, reiterada en sentencias como las SL 1016 de 2020, SL 10759 de 2020 y SL 2375 de 2020, entre otras, también enfatiza en que la dependencia económica no se desvirtúa porque los reclamantes tengan ingresos provenientes de terceros ajenos al causante del que se predica la dependencia o tengan vivienda propia.

Al tenor del artículo 167 del CGP, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen; en el caso, compete a la demandante demostrar que dependía económicamente de su hijo para el 14 de septiembre de 2012³³. fecha de su fallecimiento.

Con la intención de formar el convencimiento judicial en este sentido, la demandante solicitó que se recibieran los testimonios de Álvaro López Agudelo, Eunice de Jesús Agudelo Vega, Elvia Rosa Restrepo Guzmán y Luz Amparo Restrepo Guzmán³⁴. De ellos comparecieron, Eunice de Jesús Agudelo Vega y Álvaro López Agudelo. Por su parte Colfondos S.A.³⁵ solicitó el interrogatorio de parte de la demandante y Mapfre S.A. el de José Leonardo Bolívar Ortiz. Las personas citadas como testigos comparecieron, al igual que la demandante lo hizo para absolver el interrogatorio de parte.

³⁰ Sentencia SL1219 de 2019, citando la 44601 de 2011

³¹ SL 848 de 2019, citando la SL 14923 de 2014

³² SL 4599 de 2019

³³ 01PrimeraInstancia; 01Expediente1820150787.PDF, pág.59

³⁴ 01PrimeraInstancia; 01Expediente1820150787.PDF pdf, pág.7

³⁵ 01PrimeraInstancia; 01Expediente1820150787.PDF pág.95

De las declaraciones se extrae la siguiente información relevante:

Sandra Lucía Muñoz Guzmán -Demandante-	<p>Estudió hasta la primaria, actualmente trabaja en oficios varios, pero hasta el momento del fallecimiento de su hijo siempre se había dedicado a ser ama de casa. Para ese momento vivía con su hijo y con su esposo José Leonardo, ambos eran conductores, su hijo Víctor hacía 7 meses que había empezado esa labor, por la cual devengaba \$566.000 mensuales, los cuales aportaba en efectivo al hogar para suplir los gastos de arriendo, gas, servicio, luz, entretenimiento, el pago de celular, que ascendían a \$1'385.000. Su hijo le daba su salario en efectivo para los gastos del grupo familiar, sin sacar de ese valor ninguna suma por requerimientos de su hijo en el transcurso del mes, pero desconoce si recibía otro ingreso mensual, el valor restante lo solventaba su esposo, quien también era conductor y tenía un salario de \$950.000 mensuales. Indica que los gastos personales de su hijo ascendían a \$360.000 al mes, que estaban incluidos en los gastos del grupo familiar. Aceptó que su hijo tenía una novia con la cual requería de \$60.000 pesos para la recreación y espacios en pareja, y tenía un préstamo de \$60.000 con su novia por una moto. Estaba afiliado a la seguridad social pero no tenía ningún beneficiario en salud.</p> <p>Afirma que, tras la ausencia de su hijo, la situación del hogar cambió totalmente, pues dada la falta de su aporte económico tuvieron que irse de la casa donde vivían en San Antonio de Prado la cual era granda y de 3 habitaciones, por la cual pagaban un canon de \$300.000 pesos, a una pieza en Caldas donde tenían que compartir el baño y la cocina, cuyo arrendamiento ascendía a \$150.000.</p> <p>Aceptó que en el año 2012 se entrevistó con una persona de Mapfre S.A., y respondió un cuestionario, el cual fue autenticado en notaria, en él se mencionan los ingresos y gastos de la familia, se indicó la inexistencia de ingresos o rentas propias, y que su esposo ha velado siempre por el sostenimiento del hogar, hasta dos años después de morir su hijo, porque abandonó el hogar; sostiene que al vincularse laboralmente su hijo también contribuyó a su sostenimiento, y aun cuando él necesitaba dinero para transportarse o alimentarse, muchos de esos gastos eran cubiertos con la suma general mensual aportada, porque ella le preparaba sus alimentos y compraba los implementos de aseo persona. Los gastos fúnebres del entierro de su hijo los asumieron ambos padres, teniendo que hacer un préstamo.</p>
José Leonardo Bolívar Ortiz -Padre del causante-	<p>Estudió hasta tercero de primaria, actualmente es conductor. Para el 14 de septiembre de 2012 estaba casado con la señora Sandra Muñoz, quien era ama de casa y figuraba como su beneficiara en salud. Afirmo que asumía junto con su hijo Víctor Manuel los gastos de su hogar que ascendían alrededor de \$1.400.000 mensuales, de los cuales la alimentación oscilaba entre \$400.000 a \$600.000 pesos, dependiendo de precio de los productos y lo que ellos disponían económicamente;</p>

	<p>los servicios públicos entre \$150.000 a \$170.000, el arriendo era de \$300.000 y su hijo tenía una deuda de \$60.000 mensuales para el pago de una cuota de una moto que era de su novia; adicionalmente, Víctor se encargaba del pago de sus propios gastos como uno a tres pasajes de cuenta de él, su ropa; no necesitaba medio de transporte para su trabajo porque manejaba un camión y se desplazaba en él, ocasionalmente se transportaba en bus, por su labor recibía \$565.000 mensuales, que recibía libres al haberle hecho ya la deducción de gastos en seguridad social y que se los daba a su mamá para aportar al hogar, y adicionalmente tenía una bonificación de \$180.000 a \$200.000 quincenales según los viajes que realizara, de donde sufragaba sus gastos personales, su recreación y la ropa que compraba financiada, sus gastos propios eran de \$360.000. El funeral de su hijo se sufragó con un dinero que prestó la esposa.</p> <p>Explicó que él siempre llevó la obligación del hogar, pero su hijo dejó de estudiar muy joven para trabajar en fincas o manejando un carro por porcentaje, de lo que recibía \$80.000 a \$150.000 que le daba a su madre para ajustar los gastos de la casa, ya después alrededor de 1 año y medio, comenzó a trabajar como conductor donde llevaba 7 meses trabajando antes de su fallecimiento, y aunque tuvo novia no tenía hijos y siempre vivió con ambos padres.</p> <p>Tras la muerte de su hijo las condiciones de su hogar cambiaron radicalmente, tuvieron que irse a vivir en un cuarto en arriendo en una vereda en Caldas, en la cual se pagaban \$170.000 por mes, porque ya no les alcanzaban sus ingresos para los gastos, pues su esposa nunca trabajó, dependía un 100% de él y de su hijo. El señor José afirma que su salario mermó pues dejó de trabajar por un tiempo y en este lapso sólo le pagaban el mínimo, su esposa y él se separaron y aunque todavía le colabora económicamente es muy poco lo que le puede dar, aproximadamente \$150.000 o \$200.000 mensuales cuando le queda, y además la señora Sandra vive actualmente con su madre y a raíz de la separación y la falta de ingresos empezó a trabajar de manera ocasional haciendo aseo en casas, sin embargo, no puede hacerlo por mucho tiempo pues debe cuidar a su madre.</p>
Eunice de Jesús Agudelo Vega -Testigo-	<p>Conoce a la demandante desde hace 32 años porque trabajó con el padre de ella donde cargaba madera. Contó que la señora Sandra Lucía se casó con el señor José Bolívar y tuvieron un hijo llamado Víctor, y vivían en San Antonio de Prado en una vereda, su hijo falleció el 14 de septiembre, hace más de 5 años. Refirió que tanto Víctor como José manejaban un camión, lo que le consta porque ella trabajaba en el mismo gremio de la madera, pues si bien no fueron compañeros de trabajo, se encontraban en algunos municipios o se apoyaban si algún carro se varaba, y se comentaban las situaciones laborales. Cuando Víctor murió estaba vinculado laboralmente con la empresa Madepátula donde ganaba \$560.000 al mes, salario que era</p>

	<p>consignado en un banco y él le daba la tarjeta a su madre para que la manejara, de ahí salía el pago para cuotas, por ejemplo, de la ropa, porque la pagaban por cuotas, lo que conoce porque Víctor le decía <i>“esta semana no me va a quedar plata” (...)</i> <i>“porque me toca el club de fulano, me toca el club de perano”</i></p> <p>Desconoce a cuánto ascendían los gastos del grupo familiar, pero afirmó que Sandra nunca trabajó, que sí lo hizo después de que falleció su hijo, ella era la encargada de realizar los pagos del hogar, pero con los ingresos que suministraban su hijo y esposo, éste último, que para ese entonces ganaba al menos \$900.000. Víctor tenía una novia con quien salía a departir dentro de la misma vereda donde vivían, no salían de paseos, sino a viajes cortos, y no recibía dinero de Víctor. Narró que la situación de los padres del causante se complicó debido a los conflictos económicos que surgieron después de su fallecimiento, dado que al señor José Leonardo ya no le alcanzaba para los gastos, situación que los llevó a irse a vivir a una pieza en Caldas y finalmente a disolver la familia, y Sandra Lucía actualmente vive con la mamá y trabaja haciendo aseos en casas cuando la llaman.</p> <p>Aseguró que José Leonardo siempre estuvo pendiente de los gastos del hogar, él fue campesino, trabajaba y ganaba muy poco, por lo que Víctor no estudió por ayudarle al papá, comenzó a trabajar desde pequeño cuando le sacaron un pase para “chiviar” carros en San Antonio de Prado, y cuando cumplió la mayoría de edad, le dieron un pase de más categoría y comenzó a manejar carros más grandes.</p>
Álvaro López Agudelo -Testigo-	<p>Conoce a la demandante desde hace más de 20 años en razón de vecindad. Señaló que Sandra Lucía se casó con el señor José Leonardo y tuvieron un hijo llamado Víctor, a quien también conoció toda vez que este fue conductor y trabajaron en la misma empresa cargando madera, precisando posteriormente el testigo que trabajaba independiente. Víctor vivía con sus padres en San Antonio de Prado en una casa de dos piezas, un baño, cocina, sala y patio; éste falleció alrededor de cuatro años atrás, y en ese momento manejaba un camión con un señor llamado Jaime Velásquez, donde ganaba alrededor de \$560.000 y unas bonificaciones de \$180.000 a \$200.000 quincenales, lo cual conoció porque en el gremio todos trabajan así y se comentan.</p> <p>Desconoce a cuánto ascendían los gastos del hogar, no obstante, sabe que pagaban \$300.000 de arriendo, porque al ser vecino conocía el valor de las casas del sector y los precios se comentaban entre vecinos; afirma que Víctor y su padre eran quienes aportaban para los gastos del hogar, el primero le entregaba a su madre \$560.000 mensuales y su padre alrededor de \$980.000, lo cual conoce porque ambos se lo comentaban, viendo en ocasiones que Víctor le entregaba a la demandante el dinero en efectivo, lo cual empleaba en pagar los</p>

	<p>gastos del hogar, como arriendo y comida, pues Sandra no tenía ingresos, ni recibía ayudas de nadie, sufragando Víctor sus gastos personales con lo recibido por bonificación.</p> <p>Víctor tenía novia, pero no se llegó a casar, no tuvo hijos, y desconoce si tenía gastos con ella. El funeral de Víctor fue pagado por sus padres con plata prestada.</p> <p>Contó que después del fallecimiento de Víctor, sus padres no siguieron viviendo en la casa en San Antonio de Prado, ya que se tuvieron que ir a vivir a una pieza en una vereda de Caldas, y a raíz de todos esos problemas económicos, meses después, la señora Sandra y el Señor José Leonardo se terminaron separando.</p>
--	---

Cabe resaltar que para Colfondos S.A. y Mapfre S.A., las versiones de los testigos carecen de utilidad para definir el debate probatorio indicando que son de oídas, y contradictorias; doliéndose la última sociedad de la valoración de la A Quo en torno a la totalidad de la prueba, que de realizarse adecuadamente se hubiera llegado a una conclusión diferente.

Refieren que, la testigo Eunice de Jesús afirmó que a Víctor le pagaban a través de una tarjeta la cual era manejada por la señora Sandra Lucía, mientras que el testigo Álvaro y la propia demandante indicaron que el causante entregaba el dinero en efectivo; desconoce cuáles eran los gastos del causante, los del hogar y de la demandante, así como el valor del arriendo; afirmó que la demandante tenía afiliado a su hijo a una funeraria, pero cuando este murió, ella realizó un préstamo para el pago de gastos fúnebres, además refirió que la casa era pequeña, tenía un cuarto, en la sala dormía Víctor y una cocina, lo cual no es cierto según lo manifestado por la demandante y la documental, y advirtió que el señor José Leonardo siempre pagó los gastos de la familia.

Sostiene que el testigo Álvaro no dio respuestas concretas de las condiciones de la demandante y gastos del hogar, señaló que Víctor llevaba 2 años conduciendo antes de fallecer, contrario a lo afirmado por sus padres y lo registrado en la investigación administrativa en torno a que solo llevaba 7 meses trabajando. Dijo conocer por su condición de compañeros, que el causante devengaba \$560.000 y una bonificación, pese a ello, estos nunca trabajaron en la misma empresa, no observó cuando Víctor recibiera su salario o la bonificación.

Frente a tales inconformidades, en esta sede se evidencia que:

- Las inconsistencias advertidas por las recurrentes en aspectos como la forma en que se entregaba el dinero a su madre, esto es, en efectivo o tarjeta, o que no tuvieran un conocimiento directo sobre los gastos del hogar, o como se distribuía la casa, no tienen una identidad suficiente para desvirtuar la dependencia económica de la actora frente a su hijo fallecido, pues los declarantes son coincidentes en señalar los ingresos provenientes de la labor desplegada por

Víctor Manuel y José Leonardo, y que estos se destinaban a sufragar las necesidades del hogar, ello, por cuanto la señora Sandra Lucía no percibía remuneración de trabajo, no realizó actividad económica alguna, ni tenía ingresos de alguna clase, y el no tener datos concretos en algunas de sus respuestas que hacen parte de la intimidad de la familia, no les resta credibilidad a sus dichos, los que resultan para este Despacho veraces dado el vínculo de vecindad que tenían con el referido grupo familiar, así como el laboral dado que tanto los deponentes el causante y su padre pertenecían al mismo gremio de conductores, circunstancia que también hace admisible el conocimiento de los testigos en torno al salario y bonificaciones recibidas por el causante.

- No se observa contradicción con el dicho de la declarante Eunice sobre la afiliación que la señora Sandra Lucía tenía de su hijo a la funeraria, por cuanto no afirmó que a través de ella se sufragaban los gastos fúnebres, ambos testigos refirieron que los padres tuvieron que prestar dinero para pagar las exequias.
- Tampoco resulta contradictorio lo referido por el testigo Álvaro en cuanto a que Víctor llevaba 2 años conduciendo, pues si bien su vinculación mediante contrato de trabajo solo fue 7 meses antes de fallecer, el testigo no refirió en sí a la existencia de una vinculación laboral, sino al tiempo en que llevaba ejerciendo la actividad de conducción, pues recuérdese que de las declaraciones de sus padres y de la testigo Eunice se corroboró que el causante comenzó a conducir siendo un menor de edad, dejó sus estudios con el fin de conseguir recursos para apoyar a su padre en los gastos del hogar, e inició a conducir carros en la vereda, y tras arribar a los 18 años consiguió un pase de mayor categoría, pasó al camión.

Ahora lo apelado por la demandada y la llamada en garantía, sobre **la configuración de la confesión** por parte de la demandante y el señor José Leonardo (*quien pese a ser vinculado al proceso como interviniente ad excludendum no presentó demanda, pero fue interrogado como tal*), considera esta Sala que al admitir el aporte brindado por el señor José Leonardo en su rol de cónyuge resulta apenas lógico, pues en su cumplimiento de deberes conyugales asumía gastos del hogar y tenía como beneficiaria a Sandra Lucía en salud, no derivando ello necesariamente, como pretende Colfondos S.A., en la inexistencia de la dependencia económica de la madre respecto de su hijo, puesto que admitió que su esposo aportaba al hogar alrededor de \$950.000, fue consistente en referir sobre la contribución que también brindó su hijo al hogar en un valor de \$566.000, no siendo posible dar el alcance de confesión a esto, para concluir en la inexistencia de la dependencia económica, en tanto según los alcances jurisprudenciales en la materia son claros al advertir que la dependencia económica no tiene que ser absoluta, logrando probado que el aporte de Víctor resultaba necesario para la congrua subsistencia de su madre, quien para la fecha del fallecimiento no laboraba, no tenía rentas, situación que no se puso en duda dentro del proceso.

No resulta acertada la objeción de Mapfre S.A., en cuanto a la supuesta ausencia de valoración por parte de la A Quo de la investigación administrativa, porque sí analizó el cuestionario realizado a los padres y sus respuestas, no concluyendo en los efectos negativos considerados por el fondo de pensiones, pues en ella se registró que los gastos

mensuales del hogar ascendían a \$1.385.000 al mes, de los cuales el señor José Leonardo aportaba \$819.000 y Víctor Manuel \$566.000 pesos mensuales, valor del cual se descuentan \$360.000 de gastos personales del causante, interpretando acorde a lo dispuesto jurisprudencialmente, que la demandante no tenía capacidad de solventar sus propios gastos al momento de fallecer su hijo, configurándose claramente la dependencia económica, tanto del cónyuge como de Víctor Manuel su hijo.

Sobre la diferencia respecto del valor que efectivamente ingresaba al hogar por parte del afiliado fallecido no se puede desconocer o ignorar lo declarado por los señores José Leonardo y Álvaro en cuanto a las bonificaciones que recibía el afiliado fallecido, y de las cuales éste podía asumir sus gastos personales, pues si bien esta información no se encuentra contenida dentro de la investigación administrativa, una decisión como la que es de objeto dentro del presente litigio, no puede fundamentarse solo en tal investigación, por el contrario, al valorarse de manera integral el material probatorio recaudado en conjunto, evidente resulta la dependencia económica derivada del afiliado para con su madre, máxime que ésta al ser preguntada sobre los ingresos mensuales de su hijo, indicó *“exactamente no lo sé, porque él aporta sino los \$566.000, pero exactamente no lo sé”*, siendo coincidente en recibir de su hijo dicho monto, sin que de éste le pidiera algún tipo de devolución o entrega durante el mes para sus gastos personales, lo que es comprensible si se considera que adicionalmente devengaba bonificaciones.

Atendiendo al alcance hermenéutico del concepto de dependencia económica analizado anteriormente, es claro para la Sala que no debe ser total y absoluta, al resultar improcedente predicar estados de indigencia en el contexto de un Estado Social de Derecho. Basta con demostrar una afectación sustancial a las condiciones materiales de vida o la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que permita a los beneficiarios obtener unos ingresos para vivir de manera digna³⁶.

Y es precisamente este aspecto el que se probó suficientemente en el plenario, sobre todo con la prueba testimonial la cual merece credibilidad a esta Sala por apreciarse con claridad la relación de necesidad que se predica para concluir en la dependencia económica de la demandante frente al afiliado fallecido, encontrándose plenamente acreditada la importancia del sustento que brindaba el causante para su madre, pues contrario a lo aducido por la recurrente, se tiene que el estado de necesidad del grupo familiar era tal, que el solo ingreso del señor José Leonardo como padre y cónyuge, no lograba cubrir la totalidad de gastos, contribución que no solo comenzó al vincularse laboralmente con una empresa, sino incluso siendo un menor de edad, viéndose avocado a dejar sus estudios desde pequeño para apoyar a su padre en los gastos. Así al fallecer este, las condiciones familiares se vieron afectadas de forma tal que se vieron en la necesidad de irse a vivir a un cuarto, con servicios de cocina y baños compartidos, evidenciando una desmejora en la calidad de vida de la pareja, y que derivó en la ruptura de la relación conyugal.

³⁶ Sentencias T-491 de 2013. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-732 de 2012. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y C-111 de 2006. MP. Rodrigo Escobar Gil.

En ese orden de ideas, esta Sala de Decisión **confirmará** la decisión proferida por la Juez de primera instancia, pues se acreditaron en suficiencia los presupuestos normativos para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en favor de la demandante.

Actualización de la condena en concreto

Por mandato del artículo 283 del CGP, procede el Despacho a liquidar las condenas desde el 15 de septiembre de 2012 -día siguiente al fallecimiento del causante- hasta el 30 de abril de 2023, se indica a continuación:

Año	Valor pensión (mínimo)	Numero de mesadas	Total Retroactivo (mínimo)
2012	\$ 566.700	4 y 16 días	\$ 2.569.040
2013	\$ 589.500	13	\$ 7.663.500
2014	\$ 616.000	13	\$ 8.008.000
2015	\$ 644.350	13	\$ 8.376.550
2016	\$ 689.454	13	\$ 8.962.902
2017	\$ 737.717	13	\$ 9.590.321
2018	\$ 781.242	13	\$ 10.156.146
2019	\$ 828.116	13	\$ 10.765.508
2020	\$ 877.803	13	\$ 11.411.439
2021	\$ 908.526	13	\$ 11.810.838
2022	\$ 1.000.000	13	\$ 13.000.000
2023	\$ 1.116.000	4	\$ 4.464.000
			\$ 106.778.244

Por tanto, Colfondos S.A. adeuda a la hoy demandante, por concepto de mesadas pensionales causadas desde el 15 de septiembre de 2012 al 30 de abril de 2023, a razón de 13 mesadas anuales y con base a un salario mínimo legal mensual vigente en cada anualidad, la suma de Ciento Seis Millones Setecientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos (\$106.778.244). Continuará reconociendo la mesada pensional vitalicia a Sandra Lucía Muñoz Guzmán en las referidas condiciones.

Lo anterior, sin perjuicio de la orden impartida a Mapfre Seguros de Vida de cubrir la suma adicional que se requiera para completar el capital necesario para financiar el monto de la pensión de sobrevivientes.

Del retroactivo pensional se autoriza descontar las cotizaciones destinadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, según lo decantado por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia³⁷.

Asimismo, se **confirma** la autorización dada a Colfondos S.A. a descontar del retroactivo pensional la suma de \$541.441 cancelado a la señora Sandra Lucía Muñoz Guzmán por compensación de la devolución de aportes realizada a la madre del causante, **adicionando** la decisión en cuanto a que dicha suma se deberá compensarse de forma indexada, por cuando no puede obligarse al acreedor a recibir lo adeudado en un valor devaluado por efecto de fenómenos como la inflación.

³⁷ En las sentencias de SL 1195 del 29 de enero de 2014, radicación 48.918, SL 9782 del 23 de julio de 2014, radicación 54.583; SL 10143 del 30 de julio de 2014, radicación 45.232; SL 13547 del 1 de octubre de 2014 radicación 47.264, entre otras.

b) Intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Se encuentra legalmente prevista en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993³⁸ la causación de intereses moratorios en favor de los (a) pensionados (a), ante la tardanza de la administradora de pensiones, en el pago de las mesadas, dentro de los términos legales, que para la pensión de sobrevivientes es de dos (02) meses contados a partir de la reclamación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 717 de 2001.

En el asunto conocido por la Sala, ha transcurrido mucho más de 2 meses desde el momento en que se reclamó el derecho pensional sin que se materializara su reconocimiento. Recurre la AFP la condena emitida desde la primera instancia, por no considerarlos causados, lo cual deviene insuficiente en atención a que, la pensión de sobrevivientes fue negada aduciendo ausencia de dependencia económica, a pesar de haberse adelantado una investigación que daba cuenta de que si bien aquella no era absoluta, mínimamente el hijo de la demandante, quien convivía con ella, era el encargado de asumir parte importante de los gastos del hogar, en tanto aportaba para el arrendamiento, servicios públicos y alimentación.

Los intereses moratorios se están causando desde el 7 de febrero de 2013, hasta el día anterior a aquel en que se efectúe el pago de lo adeudado.

En este punto se **confirmará** la sentencia venida en apelación.

III. EXCEPCIONES

Las excepciones formuladas por las demandadas han quedado implícitamente resueltas, mereciendo especial pronunciamiento la de prescripción, que no operó, al no haber transcurrido entre la causación de la prestación, su reclamación y la radicación de la demanda, el periodo de tres años a que refieren los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS.

IV. COSTAS

Costas en esta instancia a cargo de Colfondos S.A. y Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. por haber resultado vencidas en su recurso. Agencias en derecho en el equivalente a 1 SMLMV en 2023 a cargo de cada una y en favor de la demandante.

V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

³⁸ El art.141 de la Ley 100 de 1993 dispone que “a partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago”.

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín el 11 de mayo de 2018, en el proceso ordinario laboral de doble instancia, promovido por Sandra Lucía Muñoz Guzmán contra Colfondos S.A., a la que fue llamada en garantía Mapfre Colombia Vida Seguros S.A.

SEGUNDO. Actualizar el valor de la condena, precisando que, al 30 de abril de 2023, Colfondos S.A. adeuda a la demandante, la suma de Ciento Seis Millones Setecientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos (\$106.778.244). La mesada pensional se continuará pagando en 2023 en un millón ciento sesenta mil pesos (\$1.160.000,00), sin perjuicio de los aumentos anuales del artículo 14 de la Ley 100 de 1993. Se autoriza descontar del retroactivo pensional las cotizaciones destinadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

TERCERO: Adicionar el numeral quinto de la sentencia de instancia, en el sentido de que la compensación de la suma de \$541.441 cancelada a la señora Sandra Lucía Muñoz Guzmán por devolución de aportes, lo será de forma indexada al momento de su pago.

CUARTO: Confirmar en lo demás la sentencia conocida en apelación.

QUINTO: Costas en esta instancia a cargo de Colfondos S.A. y Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., quienes deben asumir por partes iguales las agencias en derecho que en esta sede se fijan en el equivalente a 1 SMLMV en 2023.

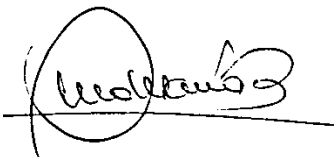
Notifíquese por edicto.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Las Magistradas,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



LILIANA MARIA CASTAÑEDA DUQUE